

# Escándalo de las escuchas: balance de daños y contornos de una nueva regulación de la prensa británica

**En la patria del liberalismo**, el destape de las amistades peligrosas y, a menudo, vergonzantes entre periodistas y políticos ha forzado a los partidos a acordar un nuevo sistema de regulación que no es aceptado por el sector. Las consecuencias del escándalo y la onda expansiva del **informe Leveson** podrían tener un preocupante **efecto silenciador** si prosperan los planes de Scotland Yard de limitar al máximo los contactos entre agentes y periodistas y si se consolida el creciente recurso de los abogados a enarbolar las palabras de Leveson para **acallar reportajes**.

## **BORJA BERGARECHE**

“Creo que hay algo en las persecuciones que excita a los *paparazzis*”, dijo la actriz Sienna Miller en su comparecencia en noviembre de 2011 ante la comisión de investigación sobre el escándalo de las escuchas. “Con 21 años, empecé a verme perseguida todas las noches por una banda de periodistas. Vale que llevar cámaras hace legal su trabajo, pero, si les quitas las cámaras, lo que queda es una veintena de hombres persiguiendo a una joven por la calle”, explicó al juez Brian Leveson, responsable de una minuciosa investigación que ha sacado a la superficie los más bajos fondos de la

interacción entre periodistas, políticos y policías en Gran Bretaña.

“Era como vivir en un videojuego, vivía en un estado de completa ansiedad y paranoia”, lamentaba la conocida actriz, de 30 años, al testificar en la sala del Alto Tribunal de Londres que albergó el procedimiento cuasijudicial, dirigido por el prestigioso magistrado desde su nombramiento para esta misión por el primer ministro en julio de 2011 hasta la publicación de su informe final el 29 de noviembre de 2012. Miller explicó cómo era perseguida por entre 15 y 20 *paparazzis* allá donde fuera, una situación que

**Borja Bergareche** es corresponsal del diario *ABC* en Londres.

degeneraba a menudo en persecuciones con situaciones al volante “claramente ilegales”, como cuando uno de ellos casi atropella a una mujer embarazada al saltarse un paso de cebra para no perder de vista a la actriz.

Unos días antes, Hugh Grant, el actor convertido en abanderado de las miles de víctimas de los excesos y las escuchas ilegales de una parte de la prensa británica, diseccionaba así a sus perseguidores: “Hay dos tipos de *paparazzis*: los que están en nómina de los periódicos, que pueden llegar a mostrar un mínimo de decencia, y los que trabajan por su cuenta. La policía cree que estos son reclutados cada vez más entre gente con antecedentes criminales, y no tienen piedad porque el botín es muy alto. Sospecho que son estos segundos los que seguían a la princesa Diana”.

6.349 “víctimas potenciales”, de las que 829 son “probables”

En el periodo de mayor acoso de los medios en su vida, Sienna Miller llegó a cambiar de móvil tres veces en tres meses, y terminó acusando a su círculo más íntimo de filtrar información de su vida privada cuando vio publicadas cosas que solo había compartido con tres o cuatro personas. Todavía no se sabía, claro, que un detective privado a sueldo del tabloide dominical *The News of the World* y de otros diarios londinen-

ses espiaba sus comunicaciones. “Me siento muy mal tras haber acusado de traición a gente que sé que preferirían estar muertos a traicionarme”, explicó la actriz, modelo y diseñadora de moda. Sus sospechas, fruto de la paranoia, se extendieron inevitablemente a su propia madre y su hermana. Tenía un número de teléfono que empleaba únicamente para comunicarse con su agente, pero Glenn Mulcaire, experto en acceder a los mensajes de contestadores automáticos, también lo controlaba.

Cuando Miller fue informada de que, en realidad, sus teléfonos –incluido el número que usaba para hablar con su agente– estaban pinchados por el *News of the World*, llevó a finales de 2010 a los tribunales a la empresa editora del tabloide, News International, propiedad de Rupert Murdoch y presidida por su hijo, James Murdoch. “Estaba nerviosa por enfrentarme a un imperio con muchos más recursos que yo, era desalentador”, declaró la actriz. Pero Miller ganó. Y News International tuvo que pagarle 110.000 euros por daños y perjuicios. Una orden judicial, además, prohíbe desde entonces el acoso mediático a la actriz. “Mi vida ha cambiado por completo”, aseguró Miller.

Mulcaire fue encarcelado unos meses en 2007 por escuchas ilegales al príncipe Guillermo, junto con el corresponsal de la Casa Real del *News of the World*, Clive Goodman. Entre los 11.000 documentos aprehendidos por la policía al espía a sueldo figuraban 4.332 nombres íntegros

o parciales, 2.987 números de teléfono, 30 cintas de grabaciones de audio y 91 códigos PIN, según desveló *The Guardian*, el diario que ha liderado desde 2009 –cuando todo el *establishment* prefería hacer oídos sordos– las informaciones sobre el escándalo. En febrero de 2012, Sue Akers, la comisaria de Policía responsable de la investigación –llamada operación Weeting– desveló ante la comisión Leveson que Scotland Yard había identificado a 6.349 “víctimas potenciales” de las escuchas, de las cuales 829 son “víctimas probables”. A día de hoy, unas 120 personas han sido arrestadas en relación con el escándalo, de las cuales la mitad son periodistas o antiguos periodistas.

Unas 120 personas  
arrestadas; la mitad,  
periodistas o experiodistas

La policía mantiene abiertas al menos tres operaciones paralelas vinculadas directamente con los desmanes de la prensa tabloide: la operación Weeting investiga las escuchas telefónicas; la operación Elveden, el pirateo informático, y la operación Tuleta, los sobornos a policías y funcionarios públicos, que ya ha dado pie a una veintena de detenciones. Según datos de la BBC de primeros de mayo, la operación Elveden es la que más detenciones ha provocado: 64 personas, incluidos 17 periodistas o experiodistas de *The Sun* y siete de otros periódicos. La operación Weeting ha

llevado a la policía a arrestar a 37 individuos, incluidos 19 empleados o ex empleados del *News of the World* y siete de otros periódicos. Finalmente, la operación Tuleta sobre pirateo informático ha generado 20 detenciones, incluidos siete informadores.

El mayor grupo de profesionales de la información detenidos estaban en nómina del Grupo Murdoch, que incluye en Gran Bretaña *The Times*, *The Sunday Times*, *The Sun* y su actual edición dominical *The Sun on Sunday* –sucesor del difunto *News of the World*. Pero la lista de la deshonra incluye periodistas vinculados a otros tabloides como el *Daily Mirror*, el *Sunday Mirror* y el *Daily Star*. Así, en marzo, cuatro periodistas o experiodistas vinculados al *Daily Mirror* –propiedad del *holding* Trinity Mirror– fueron detenidos también para ser interrogados por posibles escuchas en 2003-2004.

Es importante notar que las fuerzas de seguridad británicas pueden detener a una persona sin que existan cargos en su contra, con la mera finalidad de interrogarle. De hecho, varias personas afectadas han pedido a la Justicia que aclare cuanto antes la presentación de cargos para reducir la situación de incertidumbre legal que pende sobre decenas de personas a cuyas puertas ha llamado Scotland Yard. Esta indefinición procesal no afecta, por cierto, al núcleo duro de News International, la editora de medios de Murdoch en Gran Bretaña, bajo el “reinado” de Rebekah Brooks. La colaboradora pelirroja del viejo millonario

australiano ha sido ya acusada formalmente de intento de soborno y obstrucción a la Justicia. Brooks fue consejera delegada de News International entre 2009 y 2011 y, antes, la directora más joven de un periódico británico cuando fue responsable de *News of the World* de 2000 a 2003 y la primera mujer en dirigir *The Sun* –el tabloide con más testosterona informativa del quiosco– de 2003 a 2009. También han sido presentados cargos contra su marido; su ex asistente personal, Cerril Carter; sus guardaespaldas, Daryl Jorsling y David Johnson –el pasado 3 de mayo, acusados de ocultar pruebas–, y su chófer, Paul Edwards.

Además, han sido procesados Mark Hanna, jefe de seguridad de News International; Andy Coulson, director del *News of the World* de 2003 a 2007 y posterior portavoz (y amigo personal) de David Cameron; Clive Goodman, de nuevo; Geoff Webster, subdirector de *The Sun*, acusado el pasado 20 marzo de dos delitos de pagos ilegales a funcionarios públicos, y Virginia Wheeler, editora de Defensa del mismo diario, por presuntos hechos similares. “No me extraña que consiguieran tantas exclusivas sobre las Fuerzas Armadas”, me decía, con ironía, un veterano corresponsal de guerra de *The Times*.

Sienna Miller fue la primera víctima de escuchas en presentar acciones judiciales contra News International por daños y perjuicios. Desde entonces, la compañía ha recibido más de 700 notificaciones de demandas en contra y ha

tenido que habilitar un fondo de indemnizaciones de 20 millones de libras (23 millones de euros). En marzo habían alcanzado ya más de 140 acuerdos extrajudiciales, con compensaciones de miles de libras, por unos 170 casos pendientes de decisión inminente en el Tribunal Superior de Londres. Entre quienes han llegado a este tipo de acuerdos figuran Cherie Blair, esposa del ex primer ministro laborista, el padre del futbolista David Beckham y el inefable Uri Geller, que sospecha que fue espiado por su amistad con el difunto Michael Jackson.

## News International recibió más de 700 notificaciones de demandas

En el frente policial, las investigaciones siguen abiertas y se espera que sigan sonando los portazos. Así, el pasado 14 de mayo, la policía detuvo a Clodagh Hartley, uno de los editores políticos del *Sun*, y a Jonathan Hall, funcionario de la Agencia Tributaria británica, y su novia. Las autoridades sospechan que el diario de Murdoch pagó unos 20.000 euros a Hall entre marzo de 2008 y julio de 2011 a cambio de información tributaria, pagos que canalizaban a través de la novia de este.

Las implicaciones del escándalo cabe medirlas en unidades tectónicas, puesto que ha supuesto un corrimiento de los cimientos de toda la esfera pública británica. En el ámbito económico, Rupert Murdoch ha terminado por reorganizar

su gigante mediático: ha tenido que posponer su inversión más deseada –adquirir el 100 % de BSkyB, la principal plataforma de televisión británica– y, además, se enfrenta a una rebelión de accionistas que cuestionan su papel preponderante y el de sus hijos en la gestión del grupo.

En el ámbito político, el destape de las amistades peligrosas –y, a menudo, vergonzantes– entre periodistas y la clase política ha forzado a los partidos a acordar un nuevo sistema de regulación de la prensa que no acepta el sector y que está, en estos momentos, atascado en la mesa de trabajo de la misma reina Isabel II.

Desde el punto de vista periodístico, las consecuencias del escándalo y la onda expansiva del informe Leveson podrían tener un preocupante efecto silenciador si prosperan los planes de Scotland Yard de limitar al máximo los contactos entre agentes y periodistas y si se consolida el creciente recurso de los bufetes de abogados a enarbolar las palabras de Leveson para acallar reportajes. “El escándalo de las escuchas ha supuesto una crisis de nervios en la redacción”, explicaba recientemente Philippa Kennedy, defensora del lector del *Sun*, en un debate sobre los medios celebrado el 5 de abril en la London School of Economics (LSE). “La gente tiene miedo”, afirmaba.

De forma más general, las brutales revelaciones de las prácticas abusivas, a menudo criminales, de una parte de la prensa británica ha devuelto la voz a las víctimas de esos excesos con la emergencia de un nuevo actor en el de-

bate público sobre medios y política: HackedOff, el colectivo de víctimas de mayor perfil mediático y más determinado a hacer purgar a la prensa sus pecados.

El escándalo afecta, en realidad, a esa parte tan específica del panorama de la comunicación en las islas que son los tabloides. Salvo en una serie de contados episodios menores, los incidentes de escuchas y espionaje fueron protagonizados por la prensa amarilla en la primera década del siglo. Pero sería demasiado fácil despachar de un plumazo las virtualidades de un tipo de periodismo tan odioso como dinámico, responsable para muchos del razonable estado de salud –al menos, por comparación con otros países– de la prensa británica.

Cuando Rupert Murdoch decidió el cierre del *News of the World* en las dramáticas semanas de julio de 2011, el tabloide se despidió tras 168 años de presencia en los quioscos con una difusión de 2,8 millones de ejemplares. Un liderazgo imbatible de una institución que en 1950 era el periódico más vendido del mundo, con ocho millones de ejemplares. La histórica cabecera fue la cabeza de puente en el mercado de la prensa de la metrópoli de un australiano conservador, hijo de editor y periodista, tras hacerse con el diario en 1969, después de un año de pugna con su álder ego progresista de origen checo, Robert Maxwell, dueño del imperio *Mirror*. En su último número, la que era la cabecera más sentimental para Murdoch –aunque es conocida su frase de “para saber lo

que pienso, lean el *Sun*”– recogía en el editorial una conocida cita del escritor George Orwell de 1946. “Es domingo por la tarde, preferentemente antes de la guerra, la mujer ya está dormida en la butaca, y los niños han sido enviados a la calle a dar un paseo; pones los pies en el sofá, te colocas las gafas sobre la nariz, y abres el *News of the World*”.

La existencia de un mercado de prensa popular le da a los editores británicos una penetración social que ya se ha perdido en otras latitudes. Por comparación con los datos en España, el quiosco británico es un animal de otra especie. Según datos de abril, un mes en que la muerte de Margaret Thatcher dio un leve empujón a las ventas, *The Sun* –la cabecera que se vende ahora siete días por semana– distribuyó 2.281.000 ejemplares diarios de media, frente a los 1,8 millones del *Daily Mail* y 1.042.000 del *Daily Mirror*, que vendió 10.000 ejemplares diarios más de media con su cobertura crítica de “la mujer que dividió la nación”. Entre la prensa llamada de calidad, el “thatcherista” *Daily Telegraph* subió levemente hasta los 549.000 ejemplares diarios, frente a los 399.000 de *The Times*, 196.000 de *The Guardian* –confundido a menudo en el extranjero como el diario más influyente del mercado–, y 75.000 de *The Independent*. En el caso de los tabloides, no es solo el sexo lo que marca la diferencia.

De hecho, Murdoch ya contaba recientemente en Twitter que está estudiando eliminar la famosa fotografía de una mu-

jer en *top-less* de la página tres de *The Sun*, una innovación que le permitió, en el marco de una hábil estrategia de “sorpaso”, arrebatar progresivamente el liderato al *Daily Mirror* desde que adquirió *The Sun* en 1969. Así lo reconoce el periodista Andrew Marr en su historia de referencia del periodismo británico, *The Trade*: “Aunque ya había mucho sexo en la prensa dominical, e incluso en el *Daily Mirror* –viñetas picantes, historias sugerentes y, ocasionalmente, una imagen desenfocada de carne humana–, fue innegablemente la llegada del *Sun* de Murdoch la que produjo la revolución sexual moderna en la prensa británica”.

Pero hasta sus competidores valoran que los tabloides aportan mucho más que un pecho al descubierto o una entrepierna captada por una cámara indiscreta. “Cuando compras el *Daily Mail* o el *Sun*, no buscas objetividad, sino historias que ratifiquen tu propia objetividad”, aseguraba Alexi Mostrous, un conocido periodista de investigación de *The Times*, en el debate citado en la LSE. “Pero en ciertos asuntos, como la información sobre crímenes y sucesos, siempre serán los primeros en llegar y los que con más gente hablan”, reconocía. Esta peculiar subcultura periodística, caracterizada por una competición con niveles de ferocidad impensables en las redacciones españolas y una obsesión por la historia y el detalle informativo –*What’s the story?*, cuál es la historia, preguntan obsesivamente los jefes de redacción en los diarios británicos–, además de por un

tradicional consumo elevado de alcohol y cocaína, traspasó sus propios límites y se instaló en la cultura del espionaje y el soborno. Estos bajos fondos, fuertemente asentados en las malas calles de la capital británica, fueron reventados –periodísticamente hablando– por otro periódico, el progresista *The Guardian*, el 4 de julio de 2011.

## Scotland Yard negó la evidencia durante varios años

Aquel día, el veterano periodista Nick Davies publicó que el *News of the World* había pinchado el teléfono de Milly Dowler, una niña secuestrada y asesinada en Surrey en 2002. Los espías manipularon el buzón de voz y borraron algunos de los mensajes, según la información de Davies, lo que dio falsas esperanzas a la familia de la niña de que aún seguía con vida. En diciembre de 2011, News International exigió una corrección a *The Guardian* después de que la policía afirmara que los mensajes de voz podían haberse borrado accidentalmente. Las informaciones de Davies y otras aportadas a partir de entonces por los demás diarios británicos desencadenaron, en cualquier caso, el gran terremoto que, todavía hoy, sigue moviendo la estructura sísmica de Gran Bretaña.

Pero hacía tiempo, en realidad, que se habían oído los primeros temblores. El primer aviso llegó en 2002. Ya enton-

ces, la policía local de Surrey estaba al corriente de las escuchas, según ha concluido una investigación sobre las actuaciones policiales finalizada a finales de abril. Fue un caso de “amnesia colectiva”, ha concluido la Comisión Independiente de Quejas Policiales.

En agosto de 2006 llegó el segundo aviso con el arresto de Clive Goodman, el corresponsal de la Casa Real del *News of the World* entonces, y Glenn Mulcaire, que llegó a cobrar más de 100.000 euros al año de los tabloides de Murdoch por escuchas al príncipe Guillermo y, quizás, al príncipe Carlos. En enero de 2007, ambos fueron encarcelados y el director del tabloide, Andy Coulson, dimitió. Pero una “rigurosa investigación interna” en News International concluyó que se trataba de un caso aislado, según explicó en marzo Les Hinton, un ejecutivo de Murdoch, en la Cámara de los Comunes. El sistema se resistía a mirar de cara a los acontecimientos. Cuatro meses más tarde, Coulson inició una fulgurante carrera política como portavoz de David Cameron cuando era líder en la oposición y director de comunicación del primer ministro tras su victoria en mayo de 2010. Hinton, por su parte, fue ascendido en diciembre de 2007 –nueve meses después de contar una de vaqueros a sus señorías– a consejero delegado de Dow Jones, editora del *Wall Street Journal*, tras su adquisición por News Corporation, el emporio de Murdoch.

Al tercer aviso comenzó a moverse la tierra bajo sus pies. El 8 de julio de 2009,

*The Guardian* publicó los pagos superiores a un millón de libras abonados por News International a tres futbolistas en compensación por las escuchas del *News of the World*. El 21 de julio de aquel año, el mismo diario desvelaba que hasta 3.000 personas podrían haber sido espías por el dominical. Pero Scotland Yard, especialmente Scotland Yard, seguía negando la evidencia. John Yates, comisario jefe adjunto del cuerpo, dijo entonces que no era necesario seguir con el caso “tras una cuidadosa investigación por agentes experimentados”. Los ejecutivos de Murdoch, con el conocimiento más o menos directo de su hijo James, mantenían la tesis del caso aislado.

En el otoño de 2010, un reportaje en *The New York Times* citaba a dos exredactores del *News of the World* que desmentían la versión corporativa del “caso aislado” y denunciaban que era una práctica extendida. La temperatura en los pasillos del poder político-mediático subía. Hasta que, en el escándalo de las escuchas, a la cuarta fue la vencida con las investigaciones de Nick Davies publicadas el 4 de julio de 2011, dos veranos más tarde de sus primeras informaciones-bomba sobre el tema. Y el castillo de mentiras se desmoronó como uno de naipes. El 8 de julio fue arrestado Andy Coulson, todo un portavoz del primer ministro, que ya se había visto obligado a dimitir de forma preventiva en enero de aquel año. El 15 de julio dimitió de su puesto en Dow Jones Les Hinton. El 17 de julio dimitió *sir* Paul Stephenson, comisario jefe de Scot-

land Yard y el policía de mayor rango del reino. Ese mismo domingo fue detenida Rebekah Brooks. Un día después dimitió también el número dos de la policía metropolitana, John Yates, quien había decidido cerrar la investigación tras las revelaciones de *The Guardian* en el verano de 2009. Aquel mismo lunes aparecía muerto en su casa Sean Hoare, periodista del *News of the World*. Hoare era una de las dos fuentes citadas por el reportaje del *New York Times* y uno posterior en la BBC, en los que insistía en que las escuchas eran “endémicas”. Prefirió el suicidio. La combustión lenta generada durante una década por un escándalo de proporciones colosales estalló aquel verano de 2011.

“Todos en la redacción del *News of the World* conocían los pinchazos”

Y, tras el ruido de las deflagraciones, las conclusiones. “Hubo una decisión intelectualmente corrupta de la mayor parte de Fleet Street [en referencia a la calle que albergaba a casi toda la prensa londinense en el pasado] de hacer como si el escándalo no existiese”, denunciaba recientemente Davies. Su análisis es implacable: “Durante años, hemos trabajado con el conocimiento de que una parte de nuestra industria estaba sucia, y eso hacía nuestro trabajo mucho más difícil”, aclaraba. “Cada vez que intentabas que alguien te invite a entrar en su casa,

habían sido entrenados por los sucios a esperar de ti que o bien les sobornaras, o bien les amenazaras”.

¿Tan fácil resultó que toda una industria –una subindustria, verdaderamente– se entregara durante tantos años a este festival de escuchas ilegales? En estos casi dos años de drama, varias fuentes me lo han ido confirmando: “Todos en la redacción del *News of the World* sabían de la existencia de los pinchazos”. Le llamaban “*pinging*”. Y su mecánica era muy simple. Pasaba por dejar un nombre de la víctima deseada en un papel y entre 300 y 500 libras en la mesa de un editor, esperar media hora y recibir de vuelta otro papel con la localización de la víctima elegida. Podía ser un famoso de vacaciones en Escocia o un deportista de escapada con una amante. En el camino, un agente de policía con la categoría suficiente había enviado una petición oficial, al amparo de la ley que regula los poderes de investigación de la Policía (ley Riga, por sus siglas en inglés), a una operadora telefónica para que los postes fijos de telefonía buscaran la señal del móvil de la persona acosada. Cada pocos minutos, un teléfono emite señales para localizar el receptor más cercano a través del cual enviar o recibir sus llamadas, y hacer así las redes de comunicaciones más eficientes. Un sistema tan engrasado como corrupto permitía a los sabuesos del tabloide caer sobre las vidas privadas de sus víctimas en unas pocas horas.

Quien les haya visto en acción en sucesos sonados, como la desaparición

en Portugal de Madeleine McCann –sus padres, por cierto, figuran en la lista de víctimas de las escuchas– o, como fue mi caso, con la muerte en junio de 2007 de una niña de dos años en su casa en Londres a base de golpes de su padre, un vizcaíno de 36 años, sabrán del celo profesional con el que persiguen sus historias, para lo bueno y para lo malo, estos “periodistas-vampiros”. Interceptar la señal de teléfono de una persona que no es objeto de una investigación policial es un delito. Esa fue, de hecho, la acusación que llevó a la cárcel por unos meses en 2007 a Clive Goodman. Pero el “*pinging*” no era la única técnica de localización.

Otra utilizada con frecuencia era la de intervenir las tarjetas de crédito para ver dónde se habían realizado los últimos movimientos. Así habría localizado el difunto tabloide dominical de Murdoch, por ejemplo, a John Hewitt, ex amante de Diana de Gales, cuando viajó a España para evitar la presión de los medios.

Diez años de acoso periodístico de distintos diarios de News International al ex primer ministro laborista Gordon Brown ilustran la zona gris que va del periodismo de investigación al espionaje ilegal. Como explicó el propio político escocés en su comparencia ante el juez Leveson, Mulcaire tenía, por supuesto, información privada sobre él y su familia. Un investigador privado sin identificar utilizó a un agente de policía para rebuscar aún más en las bases de datos oficiales. Un actor contratado por

*The Sunday Times*, el diario serio más leído los domingos, también propiedad de Murdoch, llamó hasta seis veces en enero de 2000 al Abbey National, el banco de Brown, haciéndose pasar por el político para obtener datos de su cuenta. El bufete de abogados Allen & Overy reconoció también que entregaron datos personales de su cliente a un impostor que trabajaba para *The Sunday Times*. Además, *The Sun*, cuando aún era dirigido por Rebekah Brooks –amiga personal de Brown– obtuvo en octubre de 2006, y publicó, información sobre el expediente médico de su hijo Fraser, a quien habían diagnosticado una enfermedad genética rara. Brooks contactó por teléfono con Gordon Brown, quien pidió que no se publicara para proteger la privacidad del niño. Pero ¿por qué estropear así una buena exclusiva de portada?

A medida que la policía fue contactando a las víctimas de Mulcaire, se fue extendiendo la paranoia entre los famosos británicos. “Cuidado con el Bluetooth, y cuidado con los números PIN”, resumía Hugh Grant. La periodista, escritora y celebridad social Jemima Khan –exmujer del candidato presidencial paquistaní Imram Khan– fue la novia del actor entre 2005 y 2007. Y explicaba así sus sospechas en un artículo en *The Independent* en julio de 2011: “Recuerdo que en aquella época comencé a notar que mensajes del buzón de voz que no había escuchado aún iban directamente a mensajes viejos o mensajes guardados”, contaba. “Di por hecho, como ha-

ría cualquier torpe tecnológico como yo, que había tocado algo en los ajustes del móvil”. La editora asociada del semanario político *New Statesman* reconoce que no se lo ponía difícil a los espías. Su PIN estaba compuesto por cuatro ceros y su contraseña era su nombre de pila. Aunque ese no era el problema. Sienna Miller llegó a cambiar el PIN varias veces al día, pero era solo cuestión de horas que lo descifrarán.

“Los periodistas de *News of the World* no necesitaban ni siquiera un detective privado para escuchar mis mensajes”, aceptaba, resignada, Khan. Su noviazgo con Grant fue un festín para la prensa tabloide de la época, que pudo saber en cuestión de minutos un ingreso nocturno en urgencias del actor o un incidente de tráfico. Grant y Khan proporcionaron algunos de los testimonios más sobrios y detallados ante la comisión de investigación dirigida por el juez Leveson, y ordenada por el primer ministro, David Cameron, en julio de 2011 para destripar “la cultura, las prácticas y la ética de la prensa”.

Entre noviembre de 2011 y agosto de 2012 desfilaron por el Tribunal Superior de Londres 337 testigos entre víctimas de las escuchas, periodistas, directores y editores de todos los grupos, así como los máximos responsables de la policía y la política, incluido el primer ministro actual y sus antecesores Gordon Brown, Tony Blair y John Mayor. Además, Leveson recibió más de 300 testimonios escritos. En total, escucharon las opiniones

de 474 individuos y 135 organizaciones: 202 pertenecientes a la industria de los medios o la comunicación, 48 policías, 41 abogados, 38 políticos, 36 profesores, 21 representantes de organismos reguladores, 14 de varias ONG, doce de la industria del entretenimiento y 62 clasificados como “otros” en la recapitulación de la BBC.

## Necesidad de un sistema de autorregulación independiente y eficaz

La comisión Leveson fue la apoteosis de ese gran vicio británico que es la “comitología”. A cada gran escándalo, una gran comisión de investigación. Se trata, en mi opinión, de una de las claves de la solidez y estabilidad del sistema institucional británico. Este, ante sus propios excesos, opta por la catarsis y la transparencia; saca al estrado a sus protagonistas y desnuda a sus responsables institucionales para, meses más tarde, asistir disciplinadamente y sin histeria a la publicación de unas conclusiones diseñadas para que, sin caer en el tópico, cambie lo suficiente sin que el sistema estalle. La “comitología” es la válvula de presión que dota al milenarismo parlamentario británico del dinamismo necesario para evolucionar. Esa capacidad de encajar golpes sin ruborizarse y de adaptarse al paso del tiempo constituye la gran fortaleza de la democracia británica. Los críticos alegan que, en realidad, esta

proliferación de comisiones anestesia el sistema. Y que el tópico lampedusiano es aplicable: cambia algo, pero no cambia nada verdaderamente.

El 29 de noviembre de 2012, el juez Leveson publicó un informe de 2.000 páginas acompañado de un resumen de 48 páginas [que se reproduce traducido tras este artículo]. Su mensaje sobre las amistades peligrosas entre periodistas y políticos era claro: “Políticos de todos los partidos han desarrollado relaciones demasiado cercanas con la prensa, de una forma que no ha sido en interés del público”. Sin embargo, en cuanto a la dimensión policial del escándalo, se muestra prudente: “No hay pruebas de corrupción generalizada en la policía”. En general, concluía que los periodistas, al perseguir sus historias, “han causado verdaderas dificultades y, en ocasiones, auténticos estragos en las vidas de personas inocentes”.

Para amaestrar de nuevo estos demonios del sector, defiende que “lo que se necesita es un sistema de autorregulación genuinamente independiente y eficaz”, que sustituya a la anterior Comisión de Quejas de la Prensa, el organismo presuntamente regulador, controlado por los propios medios, considerado como incapaz de prevenir la extensión de prácticas escandalosas e ilegales. Leveson se detenía en este punto, que ha sido uno de los caballos de batalla en los últimos meses: ¿qué papel deben tener los mandamases de la prensa en el nuevo regulador? “La característica crucial del

órgano que propongo es que su consejo y su presidente sean nombrados por un proceso justo y abierto, que incluyan a una mayoría de miembros independientes de la prensa e integren a un número suficiente de miembros con experiencia en la industria –que puede incluir a ex-directores y periodistas o académicos–, pero sin ningún director en ejercicio ni miembros actuales del Gobierno o de la Cámara de los Comunes”, recomendaba el juez. Además, encomienda al nuevo regulador la constitución de un comité para la elaboración de un nuevo Código Deontológico. Aquí, Leveson cree que “los directivos de redacción en ejercicio tienen un papel importante que jugar, aunque no decisivo”.

## Leveson dejó demasiados cabos sueltos por falta de conocimiento

Entre sus reflexiones y recomendaciones para unas nuevas normas de juego para el trabajo, siempre inquisitivo, de los periodistas figuran iniciativas loables y algunas inquietantes. Entre las interesantes estaría su propuesta de establecimiento de una línea caliente para que los informadores puedan alertar al nuevo regulador cuando sus jefes les piden que traspasen los límites, una propuesta a la que se ha opuesto la industria. “Me chocaron los testimonios de periodistas que sienten que podrían ser presionados

para hacer cosas contrarias a la ética o al código deontológico; por eso, sugiero que el nuevo órgano de autorregulación independiente debería establecer una línea caliente para alertadores (*whistleblowers*) y animar a sus miembros a asegurarse de que los contratos de los periodistas incluyen una cláusula de conciencia que les proteja si se niegan” a atender peticiones de este tipo.

Sin embargo, el juez Leveson dejó demasiados cabos sueltos en terrenos para los que, claramente, le faltaba experiencia y conocimiento. Sus múltiples referencias a la necesidad de reforzar la protección de la privacidad y de reformar la Ley de Protección de los Datos Personales de 1998 han generado preocupación. En su informe, Leveson describe la “actitud hostil de la prensa a los intentos de aplicar la ley y de mejorar los estándares de protección de la privacidad”. Y concluye con una recomendación de “reforzar la constitución y las facultades de cumplir con su función reguladora en relación con la prensa de la Oficina del Comisionado de la Información”, en referencia al organismo independiente responsable en Reino Unido de velar por el cumplimiento de las leyes de protección de datos y de acceso a la información.

Leveson llegó a sugerir entre sus propuestas que los sujetos de ciertas informaciones de la prensa tengan derecho a acceder a la información que sobre ellos han recabado los periodistas. Un escenario que eriza los pelos de la industria,

temerosa de que se ponga en riesgo la identidad de las fuentes anónimas.

El propio Comisionado de la Información, Christopher Graham, se hizo eco de esta preocupación en su informe de respuesta a las propuestas de Leveson. “El acceso a la información de los sujetos [de noticias] es particularmente problemático en el sentido de que genera una legítima preocupación sobre el posible efecto disuasorio que la propuesta del juez Leveson podría tener sobre el periodismo de investigación”, advierte Graham. En general, se muestra muy reacio a que su oficina –que debe velar por el respeto a la privacidad de los ciudadanos y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas– asuma nuevos poderes que le convertirían en un nuevo regulador legal de algunas de las actividades de la prensa. “Tomadas en su conjunto, las recomendaciones del juez Leveson para reformar la ley de protección de datos, de implementarse, acercaría la Oficina del Comisionado de la Información a convertirse en un regulador legal de la prensa”, concluía Graham en el informe que presentó en enero. “La significación de los cambios propuestos no debería ser subestimada, esta oficina no busca activamente un papel más amplio en relación con la regulación de la prensa y no subestima retos que plantearía”.

Además de la oposición explícita del Sindicato Nacional de Periodistas (National Union of Journalists) y de grupos de libertad de prensa como Index on

Censorship, las propuestas de Leveson en este ámbito tuvieron la rara virtud de hacer coincidir al *premier* conservador con su vice primer ministro liberal, Nick Clegg, quienes expresaron su “preocupación instintiva” ante estas propuestas sobre protección de datos. De forma menos polémica, Leveson reitera una vieja petición de muchas voces –incluida la del propio Graham– de que se haga realidad en la práctica judicial la posibilidad de sentenciar a dos años de cárcel a quienes vulneran la ley de protección de datos. Las víctimas de las escuchas y Leveson constatan lo que nadie discute –el régimen legal existente fue incapaz de prevenir los desmanes–, y recuerdan que, generalmente, los periódicos podían recibir, como máximo, multas de cien libras por infracciones a la ley.

Para el juez, la prensa  
se guía por principios éticos;  
internet, no

Pero el punto más cuestionado del informe Leveson es quizás el referido a la regulación de internet, un ámbito en el que el juez y el equipo de fiscales y abogados que le ayudó flaquean técnica y conceptualmente. En un informe de 2.000 folios, el juez solo dedica una página al “futuro de internet”. Y comienza por avanzar una curiosa clasificación: la prensa se guía por principios éticos; internet, no. “Internet (sic) no pretende operar bajo ningún tipo de estándares

éticos, y mucho menos estándares elevados. Algunos lo han llamado el ‘lejano y salvaje Oeste’, yo prefiero usar el término vacío ético”. De esta insostenible diferenciación –“diferencia cualitativa”, dice el informe– entre “la prensa” e “internet”, el juez concluía que “los blogueros pueden, si quieren, actuar con impunidad”.

Este punto específico generó, como siempre con todo lo referido al universo digital, una profusa literatura y microliteratura. El resumen sería que el bueno de Leveson ni entiende la naturaleza de internet ni sabe qué hacer con ello. En su concepción de un nuevo sistema de regulación de la prensa, Leveson tiene en mente en todo momento un ecosistema que abarca “la actual prensa nacional y los diarios regionales y locales con una difusión significativa”. Pero en otro apartado del informe concluye que el nuevo regulador de la prensa sí debería abarcar a ciertas publicaciones digitales (*digital only*) si ofrecen “servicios similares a los de la prensa” (“*press-like services*”). Esta indeterminación ha generado meses de angustia en la comunidad digital británica en el marco del fuerte debate de noviembre a esta parte sobre la traducción legal e institucional de las ideas de Leveson.

¿Podrían los blogueros que no se sumen “voluntariamente” al nuevo regulador ser multados en caso de infracción de sus disposiciones? Según la literalidad de las primeras propuestas sobre la mesa, algunos creen que sí. “Los blo-

gueros podrían verse sometidos a pagar daños ejemplarizantes por el hecho de no formar parte de un regulador que no estaba pensado para ellos en su concepción”, denunciaba en marzo Kirsty Hughes, la directora de Index for Censorship. En principio, existe un consenso de que los portales sin ánimo de lucro y los “blogs de pequeña escala” quedan fuera del ámbito del nuevo regulador. Pero portales como la edición británica del *Huffington Post* o conocidos blogueros políticos como Ian Dale o Paul Steines –autor del popular blog conservador Guido Fawkes– se ven en un inquietante limbo legal.

La principal conclusión de Leveson tras sus pesquisas es, por supuesto, la necesidad de sustituir la Comisión de Quejas de la Prensa (Press Complaints Commission) con algo nuevo, que el juez identifica como “un sistema de autorregulación genuinamente eficaz” y que detalla en 47 recomendaciones. El consenso es prácticamente unánime, incluso en la propia industria, en torno a la necesidad de crear un nuevo marco de regulación de la prensa. Pero los contornos concretos de este nuevo mundo han generado un amplio debate político desde noviembre. Y la llave parece tenerla, curiosamente, la reina Isabel II.

Desde que Leveson presentó sus conclusiones a finales de noviembre, la reforma del mecanismo de regulación de la prensa británica ha derivado en una fuerte polémica entre los defensores de un sistema “fuerte” que emane de

una ley y quienes creen que basta con reforzar los actuales mecanismos de autorregulación de la propia industria. Y las trincheras en las que se han clavado las bayonetas son las que separan a quienes creen que el nuevo regulador debe tener algún tipo de anclaje legal que apunte al sistema y quienes creen que cualquier regulación directa por parte del poder legislativo de las actividades de la prensa es una afrenta democrática en un país que renunció a tener una ley de prensa hace más de 300 años.

## El informe se interpretó como favorable a la regulación por ley

El lenguaje del informe Leveson, muy insistente en la reivindicación de un regulador “fuerte”, se interpretaba como favorable a la regulación por ley del nuevo marco, tal y como exigían las víctimas de las escuchas. En la patria del liberalismo político, esta posibilidad generó en diciembre una primera escaramuza epistolar en la que se marcaron las posturas. 86 políticos de todos los partidos publicaron en *The Guardian* y en *The Daily Telegraph* una carta advirtiendo de los riesgos que implicaría. La misiva iba firmada por 76 diputados y lores conservadores y un puñado de políticos laboristas y liberales que advertían que “ninguna forma de regulación legal de la prensa sería posible sin la imposición de licencias estatales, abolidas en Gran

Bretaña en 1695”. Exigir licencias para poder informar “es contrario a cualquier noción de libertad de prensa y alteraría radicalmente el equilibrio de nuestra constitución no escrita”, aseguran. En la trinchera opuesta, 42 diputados, también de todos los partidos, defendían la tesis contraria: una regulación por ley de las actividades de la prensa, tal y como demandan varias víctimas de las escuchas. “Lo que pedimos es poner fin a que los periódicos puedan regularse a sí mismos y corregir sus propios deberes”, aseguraba el actor Hugh Grant, una de las voces más activas en el colectivo de afectados HackedOff.

Esta postura gozaba de las preferencias del vice primer ministro Nick Clegg, quien rompió filas con Cameron en este asunto, y, en líneas generales, de los laboristas. Su líder, Ed Miliband, vivió su momento más dulce en su costosa carrera para consolidarse como alternativa cuando se erigió en portavoz de la indignación moral del país en julio de 2011. El escándalo, claro, le permitía fustigar a placer esa telaraña de relaciones “demasiado cercanas” –en la terminología de Leveson– entre sus dos clanes rivales, el de Cameron y el de los Murdoch.

Por su parte, el líder conservador se enfrentaba, por un lado, a una opinión pública irascible contra una prensa percibida como fuera de control y, por otro, a sus propios instintos políticos –y los de los suyos–, alérgicos a la idea de meter mano legislativa al día a día del periodismo británico (las televisiones tienen

su propio marco y un órgano regulador específico que no está en cuestión ni forma parte del debate en curso). Ya en diciembre, Downing Street comenzó a circular una tercera vía, inteligente dentro de la alambicada lógica constitucional británica pero vestida de un innegable exotismo institucional: la cédula real, o *royal charter*. Cameron necesitaba, en cuanto jefe del Gobierno, hacer avanzar la situación. Como político conservador, se había comprometido a evitar “cruzar el Rubicón” de la regulación por ley. Así que, en un habilidoso *dribbling*, proponía introducir un elemento de autoridad “real” allí donde las víctimas, los laboristas y gran parte de los liberales querían la fuerza de la ley.

Las cédulas reales han servido para dar carta de naturaleza en Gran Bretaña a unas 900 instituciones y ciudades desde el siglo XIII. La BBC, el Banco de Inglaterra, la Universidad de Cambridge y la Cruz Roja británica tienen una cédula real como documento fundacional. Bajo esta fórmula tan británica, la reina formaliza con su aceptación de una cédula real el establecimiento de una institución, en un documento escrito con caligrafía sobre papel pergamino, sellado y lacrado antes de ser presentado al Parlamento. Esta solución tan pomposa como ingeniosa garantiza desde hace décadas la independencia de la BBC, que revisa su propia *royal charter* cada diez años.

Durante el mes de febrero, el Cameron “amigo de la prensa” se reunió en varias ocasiones con el equipo negociador de la

industria periodística, compuesto por Peter Wright, del grupo editor de *The Daily Mail*; Guy Black, de *The Daily Telegraph*, y Paul Vickers, del grupo Trinity, editor del *Daily Mirror*. El Gobierno quería que una cédula real instaure un “órgano de verificación” encargado de supervisar y validar –de forma distante, con un informe cada tres años– que un nuevo órgano regulador de la prensa creado, siguiendo la lógica de la autorregulación, por la industria y no por ley actúe verdaderamente como tal.

## Cameron se comprometió a evitar la regulación por ley

De esta manera, el Cameron “sensible a las víctimas de las escuchas” neutralizaba la idea de que la prensa no es capaz de controlarse a sí misma, estableciendo este órgano de tutela emanado directamente de la constitución no escrita británica. El colectivo HackedOff pasó entonces a la ofensiva, desconfiado de un acuerdo gestado, creían, en un acto más de compadreo entre políticos conservadores y patriarcas de la prensa en los salones de Downing Street. Así, en la madrugada entre el domingo y el lunes 18 de marzo, representantes de los tres grandes partidos se reunieron en el palacio de Westminster, en el despacho de Ed Miliband, con hasta cuatro miembros de HackedOff y una delegación del primer ministro encabezada por su jefe

de gabinete, Oliver Letwin, considerado como el cerebro detrás de la alternativa *royal charter*.

De aquel conciliábulo nocturno, amenizado con pizzas y refrescos, surgió una nueva versión de cédula real, que es la respuesta del *establishment* al informe Leveson. A las tres de la mañana, Letwin comunicó por SMS los últimos detalles a Cameron, quien dio la luz verde a la propuesta. Así nació la primera traducción concreta de las 2.000 páginas de Leveson: un nuevo regulador voluntario para la industria con poderes reforzados, como el de imponer multas millonarias u obligar a publicar correcciones en portada, capaz de imponer daños punitivos a publicaciones infractoras de sus normas que hayan rechazado adherirse al nuevo marco, acompañado de un mecanismo de arbitraje gratuito para los demandantes que resuelva quejas menores de forma extrajudicial.

Este sistema de autorregulación, que la propia industria deberá establecer en su momento, estaría tutelado por ese “órgano de verificación”, creado mediante la cédula real. Por presión de laboristas y liberales, esta versión introduce la larga mano de los políticos al exigir una mayoría de dos tercios en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Loes para disolver la cédula real. Asimismo, la idea de un anclaje legal –tan deseada por las víctimas y por, se supone, el propio Leveson– reaparecía con nocturnidad al acordarse la presentación de dos enmiendas parlamentarias. Una a la Ley

de Reforma Regulatoria y Empresa para dotar de fuerza legal, en esta y cualquier otra cédula real, a la necesidad de esa mayoría de dos tercios para modificar sus términos –justificado como garantía de que futuros Gobiernos no podrían tocarla aunque quisieran, sin esa mayoría parlamentaria–, y otra enmienda a una ley de procedimiento criminal para recoger el mecanismo de arbitraje.

¿Qué opina la prensa británica de todo esto? Una semana después de la publicación del informe Leveson, los directores de los 20 principales periódicos del país se reunieron en el restaurante Delaunay de Londres. “La totalidad de la prensa nacional estaba ahí, del *Daily Star* al *Financial Times*, esto no ocurre nunca”, explicaba Alan Rusbridger, director de *The Guardian*, en un artículo publicado en su periódico el 25 de marzo. De forma general, aceptaron las tesis del juez. De las 47 recomendaciones, 36 fueron asumidas de forma íntegra y cinco con algunas modificaciones. Rechazaban, sin embargo, las seis propuestas del juez que requieren ser legisladas.

Ese consenso inicial se fue rompiendo a medida que pasaban los meses y los partidos ponían nombre y apellidos a las ideas del juez. La prensa conservadora se oponía de forma visceral a cualquier apuntalamiento legislativo del sistema. Sin embargo, *The Independent*, *The Guardian* y *Financial Times* rompieron filas a primeros de marzo defendiendo que podrían vivir con tal apuntalamiento, dada la dimensión del escándalo.

“Me avergüenza decirlo, pero no podemos fiarnos de que la prensa se vigile a sí misma, así que un órgano de supervisión y algunos elementos legales son necesarios, y no equivale a un control del Estado sobre la prensa”, explicó sobriamente Martin Hickman, periodista de *The Independent*.

El modelo acordado por los partidos en su velada con HackedOff el 18 de abril fue recibido con la oposición militante de los grupos de prensa conservadora: News International, el Grupo Telegraph, el grupo Express Newspapers –editores del *Daily Express* y del *Daily Star*– y Associated Newspapers, editora del *Daily Mail*. “Había un principio básico en juego y se ha perdido”, editorializaba *The Times* el 19 de marzo. “El papel de la prensa es controlar al Gobierno, y no debería funcionar al revés”, denunciaba el periódico de Murdoch, que acusaba directamente a Cameron de haber “cruzado a nado el río [Rubicón]” al aceptar el anclaje legal del sistema mediante las dos enmiendas descritas. Las revistas *Spectator* y la satírica *Private Eye* anunciaron inmediatamente que no se unirían a este marco regulador. El director de *Financial Times*, por su parte, advirtió del riesgo financiero que supone el mecanismo de arbitraje gratuito, que percibe como una puerta abierta a estar permanentemente enredados en demandas y facturas de abogados.

*The Guardian* y *The Independent* no se mostraron beligerantes. “No es perfecto, pero tampoco es terrible”, dijo

Chris Blackhurst, director de este último diario. “No es motivo para hiperventilar”, titulaba *The Guardian* su editorial del 18 de marzo. “Es necesario que haya palos y zanahorias para fomentar la participación” en el nuevo regulador, escribían sus editorialistas. Rusbridger intentó terciar y pidió un enfriamiento del debate con un periodo de reflexión de un año. Pero las posiciones estaban muy enquistadas, y los grandes diarios conservadores estaban furiosos por el papel destacado jugado por HackedOff.

Así, en una decisión que tomó a todos por sorpresa por lo audaz e inesperada, los editores del *Mail*, *Telegraph*, *Sun*, *Mirror* y *Express* pusieron sobre la mesa su propia versión de cédula real. Les ampara, según les confirmaron sus abogados, el derecho de cualquier profesión de solicitar a la reina una *royal charter*. Representa un abierto desafío a la clase política, con el apoyo de la Newspaper Society, que representa los intereses de hasta 1.100 diarios locales y regionales y semanarios británicos. Su versión discurre por los mismos límites que la del 18 de marzo, pero elimina el papel del Parlamento al excluir la cláusula de la mayoría de los dos tercios. Más polémico aún, reclama un derecho de veto de los representantes de la industria en los nombramientos de los miembros del nuevo órgano regulador.

El Gobierno reaccionó furioso. “La cédula real publicada el 18 de marzo es el resultado de 21 semanas de discusión y

de un acuerdo entre partidos: queremos un mecanismo de autorregulación fuerte e independiente puesto en marcha cuanto antes”, dijo la ministra de Cultura y Medios, Maria Miller. Los ciudadanos no se fían de la prensa. Según un sondeo de la empresa YouGov, un 73 % de los encuestados ve que hay “riesgo de que se repitan las prácticas inmorales e ilegales” si prospera la propuesta alternativa de los diarios, a la que no se ha unido el trío formado por *The Guardian*, *The Independent* y el *Financial Times*.

## La reina baraja dos propuestas distintas de regulación

La ingeniosa solución constitucional ideada por Cameron ha terminado por generar un embrollo constitucional. Es el terco principio de que cualquier innovación constitucional para tapan un agujero encierra el riesgo de abrir un nuevo “melón constitucional” en otro lado. La reina tiene ahora sobre su mesa, no una, sino dos propuestas para regular el regulador del nuevo regulador de la prensa. La concurrencia de estos dos modelos ha puesto el foco en un órgano poco conocido del entramado constitucional británico, el Consejo Privado de la Reina (o Privy Council). Este órgano consultivo de la monarca está compuesto principalmente por expolíticos, y se reúne una vez al mes bajo la presidencia en la actualidad del vice primer ministro Nick

Clegg, responsable de la cartera constitucional en el gabinete de Cameron.

La soberana del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no ostenta ningún poder material, que son ejercidos precisamente por uno de los comités –así lo fue históricamente– de su Consejo Privado: el Consejo de Ministros. Pero la reina todavía tiene el poder meramente formal de firmar normas de legislación secundaria, redactadas por el Gobierno, llamadas Órdenes del Consejo (empleadas en ciertos nombramientos, por ejemplo), siguiendo el consejo de su Consejo Privado (Privy Council). Además, este consejo tiene entre sus funciones “asesorar” con las cédulas reales a la reina, quien debe firmarlas en presencia de su consejo asesor. Los partidos confiaban en que la cédula real del 18 de marzo hubiera sido aprobada en la reunión de este consejo del mes de mayo. Pero la concurrencia de dos propuestas ha retrasado ahora la decisión.

La aprobación real de una cédula real debe producirse, según la práctica constitucional aplicable, “en ausencia de circunstancias contenciosas”. El 9 de mayo, los grupos de medios detrás de la propuesta del 24 de abril realizaron un gesto conciliador al anunciar que renunciaban al derecho de veto en los nombramientos, una decisión orientada a intentar sumar a los tres diarios que, por ahora, no se casan con ninguna de las versiones de cédula real sobre la mesa.

El órgano de verificación estará formado por un presidente y entre cuatro

y ocho miembros independientes y con experiencia en materia regulatoria que no podrán ser, en cualquier caso, directores o editores en ejercicio o retirados de periódicos o miembros del Parlamento. El nuevo órgano regulador, por su parte, tendrá doce miembros: siete serán independientes (ajenos a la industria) y cinco formarán parte de la prensa. Y la escaramuza se ha centrado en el modo en que decidirá sus nombramientos el “comité de nombramientos” que deberá decidir los nombres y apellidos de esas personas. Los medios “rebeldes” exigían en su contrapropuesta una decisión por mayoría cualificada, con la confianza de obtener una minoría de bloqueo en ese comité de nombramientos. Ahora defienden que tomen sus decisiones por consenso.

Las similitudes entre ambas propuestas son sustanciales y suficientes para que tengamos ya sobre la mesa los contornos del nuevo mundo en el que deberán operar los periodistas británicos, aunque la existencia de dos “finalistas” ha situado en el epicentro del debate a dos figuras nunca destinadas a protagonizar los titulares. A un lado del teléfono rojo, *sir* Christopher Geidt, el exoficial de inteligencia que es secretario privado de la reina desde hace seis años. Al otro, Jeremy Heywood, el secretario del Consejo de Ministros y funcionario de máximo rango en la Administración británica. Su misión es ayudar a quienes encarnan las máximas instituciones del Estado a tomar las decisiones. Pero no tomarlas en

su nombre. Ahora, el escenario inédito de dos cédulas reales compitiendo por la atención de un monarca sin poderes sustanciales ha dejado el ajuste fino de la nueva regulación de la prensa británica en sus “invisibles” manos.

## La Policía propone reformas para requisar material confidencial

Más allá de la letra pequeña del ecosistema regulador, se puede afirmar que el nuevo mundo pos-Leveson ya está aquí. Y sus primeras manifestaciones inquietan a muchos. Varios diarios han recibido ya cartas de abogados representando a celebridades de distinto pelaje, que amenazan con iniciar acciones legales por informaciones sobre sus clientes amparados en el espíritu y la letra del informe Leveson. Una encuesta realizada por la Newspaper Society entre sus asociados en marzo, y publicada a mediados de mayo, indica que el 27 % de los diarios locales y regionales ha recibido amenazas de organismos públicos de retirar publicidad como resultado de su actividad periodística, ya sea por publicar una información, por solicitar información o por la presencia de un periodista en una reunión. El 70 % de los diarios considera que, tras Leveson, es más difícil obtener información de las administraciones locales, frente a un 22 % que considera que la situación no ha cambiado y un 8 % que cree que ha mejorado.

Varios miembros del sector han descrito el efecto disuasorio sobre la actividad cotidiana de los periodistas –preguntar, incordiar, volver a preguntar, volver a incordiar– que habría tenido la onda expansiva del informe Leveson. Una de las consecuencias de sus recomendaciones preocupa especialmente. En su aplicación de las recomendaciones del juez, Scotland Yard ha propuesto introducir reformas que faciliten a la policía requisar material confidencial de un periodista. Según sus planes, seguirá siendo necesaria la autorización judicial, pero los agentes ya no tendrán que demostrar que no existen otras formas de obtener esa información. Además, Scotland Yard quiere reducir al máximo la posibilidad de que sus agentes puedan hablar *off the record* con un informador. Ambas medidas, según han denunciado varios

políticos y periodistas, disminuirían seriamente la capacidad de la prensa de hacer periodismo de investigación y de proteger sus fuentes confidenciales.

Así lo ve Nick Davies, la mano periodística que destapó un escándalo cuyas consecuencias todavía desconocemos: “Scotland Yard ha sido muy eficaz en explotar la situación para obtener el resultado incorrecto, que los policías ya solo hablen con periodistas en presencia de una grabadora”. El magistrado Brian Leveson habló poco en los largos meses de investigación. Cuando llegó la hora de las conclusiones, escribió, y mucho. Ahora, los grandes poderes fácticos de una gran democracia representativa –la clase política, la prensa, los aparatos estatales y una ciudadanía más poderosa– intentan encontrar su nuevo lugar bajo el sol de sus palabras. ■